

El Perú es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños que se encuentran sometidos al trabajo forzoso y a la trata con fines de explotación sexual. Hombres, mujeres y niños peruanos son explotados, debiendo laborar bajo condiciones de trabajo forzoso en el país, principalmente en la minería aurífera informal y servicios relacionados con esa actividad, en la actividad forestal, la agricultura y el servicio doméstico. Investigaciones conducidas durante el período cubierto por este Informe determinaron que existían varios indicadores de que los ciudadanos peruanos que se dedicaron a la minería aurífera artesanal debían hacerlo bajo condiciones de trabajo forzoso; entre estos indicadores podemos mencionar el reclutamiento engañoso, la servidumbre por deudas, una libertad de movimiento restringida o la imposibilidad de alejarse del trabajo, la retención o el no pago de los salarios y la amenaza y utilización de la violencia física. Las mujeres, las jovencitas—y en un número menor los jovencitos—peruanas(os) son víctimas de la trata con fines de explotación sexual en las zonas urbanas y centros mineros del Perú y con frecuencia son reclutadas(os) a través de falsas ofertas de empleo. Las mujeres y las jovencitas explotadas en localidades cercanas a las comunidades mineras con frecuencia se endeudan debido al costo del transporte y les es imposible alejarse de esos lugares debido a lo alejado de los campamentos y a la complicidad de los mineros en su explotación; a muchas se les fuerza a beber licor con los clientes. La mendicidad infantil forzosa continuó siendo un problema en las zonas urbanas. Las autoridades peruanas continuaron identificando un número creciente de niños involucrados en actividades ilícitas, incluyendo la producción y el transporte de cocaína; algunos de estos niños son coaccionados o forzados a participar en estas empresas ilegales. Hubo informes permanentes que aseguraron que el grupo terrorista grupo Sendero Luminoso, reclutó a niños y adultos para utilizarlos como combatientes y en el comercio ilícito de estupefacientes. En menor medida, niños y mujeres peruanos deben ejercer la prostitución forzosa en Ecuador y Argentina y hombres, mujeres y niños laboran bajo condiciones de trabajo forzoso en Argentina, Chile, Ecuador, Brasil y los Estados Unidos, entre otros países. El Perú también es un país de destino para mujeres extranjeras víctimas de la trata de personas provenientes de otros países sudamericanos, incluyendo a Bolivia, que deben laborar bajo condiciones de trabajos forzoso. El turismo sexual infantil existe en áreas tales como el Cuzco, Lima y la Amazonía peruana.

El gobierno de Perú no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas; sin embargo, está haciendo esfuerzos

significativos para hacerlo. La unidad contra la trata de la Policía Nacional del Perú continuó identificando un gran número de posibles víctimas y el programa de asistencia a las víctimas de la Fiscalía proporcionó servicios a 140 víctimas de la trata de personas, estos servicios incluyeron apoyo psicológico y legal. Una nueva ley aprobada durante el año exige al gobierno que informe anualmente al Congreso sobre los avances logrados en la lucha contra la trata de personas. Los gobiernos regionales conformaron comisiones de lucha contra la trata, algunas de las cuales aprobaron planes contra la trata. A pesar de la existencia de casos de trabajo forzoso en diversos sectores laborales, no pareció que se hubiera hecho esfuerzos proactivos con el fin de enjuiciar a las personas involucradas en estos casos y los esfuerzos por identificar y brindar apoyo a las víctimas de trabajo forzoso fueron débiles. Dado el gran número de víctimas identificadas durante el año, el escaso número de acusados del delito de la trata de personas que recibió una condena fue particularmente preocupante. La complicidad entre los oficiales/funcionarios en casos de delitos de trata de personas siguió constituyendo un grave problema. En un caso muy notorio de trata de personas para fines de explotación sexual, los fiscales supuestamente recibieron sobornos de los acusados de la trata a fin de que interfirieran en el juicio. Los fondos asignados por el gobierno para financiar los servicios ofrecidos a las víctimas continuaron siendo insuficientes, particularmente en el caso de adultos y los funcionarios no presentaron informes en los que se afirmara que habían enviado a la mayoría de víctimas identificadas a lugares donde pudieran prestarles alguna atención. No existió ningún refugio destinado a acoger a las víctimas de trata. La falta de refugios dejó a las víctimas en una situación de vulnerabilidad que podría determinar que volvieran a ser víctimas de la trata y algunos niños víctimas de la trata debieron ser alojados en comisarías.

Recomendaciones para el Perú: Debe intensificarse significativamente los esfuerzos por investigar y enjuiciar los delitos de trata de personas y condenar y castigar a los criminales involucrados en este delito, particularmente en lo referente a los delitos de trabajo forzoso. Adicionalmente, se debe financiar refugios y servicios especializados para todas las víctimas de la trata de personas, incluyendo a adultos, o –de lo contrario- proporcionar fondos a ONGs que posean la capacidad de prestar estos servicios; también se debe iniciar investigaciones proactivas de los delitos de trabajo forzoso a través de una colaboración más estrecha entre los funcionarios/oficiales encargados de hacer cumplir la ley, los funcionarios del sector laboral y organizaciones de la sociedad civil; se debe también desarrollar e implementar mecanismos formales de identificación y derivación de las víctimas a lugares de refugio; asegurarse de que los funcionarios/oficiales encargados de hacer cumplir la ley conduzcan redadas en base a datos de inteligencia y empleen una verificación efectiva de la identidad de las víctimas durante los operativos.

Asimismo, es necesario que se responsabilice por sus acciones a los funcionarios corruptos que facilitan y favorecen las actividades relacionadas con la trata de personas a través de investigaciones y juicios penales. Además, es necesario incrementar los fondos para contar con los debidos recursos y ofrecer capacitación a miembros de unidades de la Policía y la Fiscalía especializados en la lucha contra la trata de personas y, por último, es necesario mejorar la recolección de datos sobre el delito de trata de personas.

Procesos Judiciales

El gobierno de Perú investigó delitos de trata de personas durante el año, pero hubo un número reducido de condenas en comparación con el número de víctimas identificadas y los esfuerzos por enjuiciar y condenar a las personas comprometidas en casos de trabajo forzoso fueron inadecuados. Las leyes peruanas prohíben todas las modalidades del delito de trata de personas, habiendo establecido penas de ocho a 25 años de prisión, que son lo suficientemente estrictas y acordes con las establecidas para otros delitos graves, tales como la violación. A pesar de las pautas señaladas por el Poder Judicial, algunos investigadores, fiscales y jueces calificaron los casos de trata de personas como delitos penales menos graves por lo que solicitaron penas más leves en estos casos. La división de la Policía encargada de la lucha contra la trata de personas tuvo su sede en la capital y una unidad más pequeña estuvo ubicada en Iquitos; la eficacia de la división, particularmente fuera de la capital, se vio obstaculizada por la escasez de recursos. La mayoría de los operativos se centraron en los casos de trata para fines de explotación sexual y el número de investigaciones, procesos judiciales y condenas en casos de trabajo forzoso continuó siendo uno desproporcionadamente bajo. En algunas partes del país, la falta de una presencia del Estado y el temor de los funcionarios/oficiales a sufrir represalias por parte de los criminales involucrados en la trata de personas impidió que estos funcionarios/oficiales investigaran las denuncias de casos de trabajo o prostitución forzoso(a). La recopilación de datos sufrió un revés durante el año, ya que la Policía no utilizó una base de datos electrónica sobre casos ya existentes para realizar un seguimiento de las investigaciones de trata de personas. Las autoridades continuaron confundiendo casos de prostitución con casos de trata de personas para propósitos de explotación sexual. No hubo fiscales nombrados para ocuparse únicamente de casos de trata de personas y los efectivos policiales y fiscales continuaron viéndose afectados por la falta de una debida coordinación entre sí.

En el año 2012, la Policía investigó 215 casos potenciales de trata de personas en la capital y zonas aledañas. El gobierno dio inicio a 113 nuevos procesos judiciales. El gobierno no informó sobre el número de personas condenadas por el delito de trata de personas en el 2012, pero estadísticas de las prisiones indicaron

que a finales del 2012 había nueve personas más en prisión condenadas por el delito de trata de personas que las que había en el año 2011. No hubo información disponible sobre el número de años en prisión indicados en las sentencias condenatorias, aunque un informe de prensa indicó que un individuo condenado por el delito de trata de personas para fines de explotación sexual fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel. En el 2011, el Gobierno informó que había condenado a cuatro individuos por el delito de trata de personas para fines de explotación sexual y a una persona por el delito de trabajo forzoso.

La corrupción y una actitud tolerante frente a ésta por parte de los funcionarios/oficiales facilitaron la trata de personas en ciertos casos. Algunos funcionarios/oficiales permitieron el funcionamiento de prostíbulos que no contaban con una licencia de operación, así como la explotación sexual de menores de edad. Durante el año, seis oficiales de la Policía fueron acusados de haber extorsionado a dueños de discotecas bajo la amenaza de presentar cargos de trata de personas contra ellos. Organizaciones de la sociedad civil informaron que la participación de algunos funcionarios en la industria minera resultó en un conflicto de intereses con relación a las medidas de represión emprendidas por los funcionarios/oficiales encargados de hacer cumplir la ley contra la explotación sexual en las zonas mineras. En un caso notorio, funcionarios en Piura suspendieron a dos fiscales por 30 días por haber aceptado dinero para interferir en el proceso judicial de un presunto traficante; aunque las autoridades continúan investigando a estos fiscales, los individuos acusados de haber cometido el delito de trata de personas que supuestamente sobornaron a los fiscales fueron absueltos en enero de 2013. No se informó sobre ningún juicio seguido contra algún empleado de gobierno o sobre ninguna condena impuesta a alguno de ellos por complicidad en casos de trata de personas ocurridos durante el año 2012. En colaboración con organizaciones de la sociedad civil y a menudo contando con la ayuda de organizaciones internacionales y con el financiamiento de gobiernos extranjeros, el gobierno proporcionó capacitación contra la trata de personas a miembros de la Policía, de la Fiscalía y a otros funcionarios del gobierno.

Protección

Durante el año el gobierno peruano proporcionó servicios inadecuados a las víctimas de la trata de personas, y la falta de refugios especializados continuó representando un desafío para el gobierno. Las autoridades no desarrollaron ni emplearon procedimientos sistemáticos para la identificación de las víctimas de la trata de personas entre las poblaciones vulnerables y la capacidad que tuvieron los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para poder distinguir entre personas dedicadas a la prostitución y las víctimas de la trata de personas para fines de explotación

sexual fue muy limitada. El gobierno no mantuvo estadísticas amplias y completas de identificación de las víctimas. Agentes encargados de hacer cumplir las leyes informaron que en el 2012 habían identificado a 518 víctimas potenciales del delito de trata de personas en la ciudad y la región de Lima, incluyendo a 446 adultos y 72 niños. Este número parece incluir a un número significativo de mujeres adultas dedicadas a la prostitución que no fueron víctimas de la trata de personas. Once niños encontrados durante una redada en un campamento de Sendero Luminoso fueron enviados a refugios del gobierno para niños en situación de vulnerabilidad. De los 11 adultos que también fueron hallados durante la incursión – y luego de haberse determinado que todos ellos también habían sido secuestrados o reclutados por la fuerza para trabajar para Sendero Luminoso, solamente tres recibieron servicios del gobierno- a estos tres el Estado les proporcionó un estatus de testigos protegidos.

El gobierno no implementó un procedimiento formal que le permitiera poner sus servicios a disposición de las víctimas de la trata de personas, incluyendo su envía a un refugio, y el número de total de víctimas que recibió algún apoyo de parte del gobierno no quedó claro. Las organizaciones de la sociedad civil –sin contar con la ayuda económica del gobierno- ofrecieron a las víctimas la mayor parte de los servicios especializados, y la atención psicológica, ayuda legal y otros servicios especializados no estuvieron disponibles en muchas partes del país, de manera particular en el caso de los adultos. El programa nacional del Ministerio Público para la asistencia a las víctimas y testigos informó que había prestado ayuda a un total de 140 víctimas de trata de personas, incluyendo a 65 víctimas de la trata en el área del trabajo forzoso, 69 víctimas de la trata para fines de explotación sexual y seis víctimas tanto de trata en el área de trabajo forzoso como en el de explotación sexual. De estas 140 víctimas, 79 fueron menores de edad y 61 fueron adultos; 107 recibieron ayuda psicológica, 95 recibieron asesoría legal y 85 fueron atendidos por personal de los servicios sociales. Del total de víctimas que fueron atendidas por los servicios sociales, 49 fueron enviadas a algún refugio, 20 fueron enviadas a algún servicio de salud y únicamente siete fueron enviadas a servicios de reintegración. La Policía informó que en el 2012 había devuelto a sus padres a la mayoría de los niños víctimas de la trata que habían sido hallados en Lima y que había enviado a otros 18 niños (también víctimas de la trata) a refugios administrados por el Estado para niños en condiciones de vulnerabilidad. Dos refugios financiados por el gobierno para niñas o jovencitas que habían sido explotadas sexualmente

podían albergar a niños que habían sido víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual, aunque no se encontraban equipados como para poder proporcionar atención especializada a las víctimas de la trata. Otros refugios generales administrados por el Estado destinados a atender a niños en condición de vulnerabilidad carecían de una infraestructura básica, incluyendo un espacio suficiente para albergar a las víctimas. Asimismo, centros de emergencia para mujeres administrados por el Estado no proporcionaron ningún servicio especializado a las víctimas de la trata ni tampoco sirvieron de refugio para ellas; sin embargo, estos centros informaron que habían brindado ayuda a 34 víctimas de la trata de personas durante el año. La Policía Nacional del Perú fue la entidad responsable de ofrecer una vivienda temporal a las víctimas luego de efectuadas las redadas. Sin embargo, en algunos casos, las víctimas infantiles permanecieron en las comisarías en "centros preventivos" durante meses si los refugios carecían suficientes camas. En algunos casos, miembros de la Policía o fiscales debieron utilizar su propio dinero para ayudar a las víctimas debido a una falta de servicios para las víctimas. Prácticamente no existieron servicios especializados para víctimas masculinas y aunque las autoridades informaron que habían solventado la repatriación de víctimas peruanas que estaban siendo explotadas en el extranjero, no hubo fondos para cubrir su reintegración y otros servicios necesarios.

La participación de las víctimas en la investigación o el enjuiciamiento de los traficantes continuaron siendo limitadas. Las ONGs señalaron que las víctimas recibieron una protección y asistencia inadecuadas durante el proceso legal, y una víctima incluida en el programa de protección de testigos al parecer no podía movilizarse a su antojo o buscar un empleo remunerado. Algunos policías, fiscales y jueces no protegieron suficientemente bien la privacidad de las víctimas de trata. Sin embargo, el gobierno no sancionó a las víctimas por los actos ilícitos cometidos como consecuencia directa de haber sido víctimas de la trata. Las víctimas de la trata extranjeras tuvieron derecho a que se les concediera un estatus de residencia temporal o permanente de conformidad con la ley peruana para refugiados, aunque no hubo informes sobre alguna víctima que hubiera solicitado o recibido este estatus durante el año.

Prevención

El gobierno de Perú continuó desplegando sus esfuerzos dirigidos a prevenir el delito de trata de personas y, entre otras medidas, ofreció su apoyo a grupos de trabajo y planes de acción contra la trata a nivel regional. La Comisión

Intersectorial del gobierno, que también incluyó entre sus miembros a actores de la sociedad civil, continuó recibiendo fondos limitados para coordinar sus esfuerzos contra la trata. Sin embargo, la mayoría de entidades gubernamentales carecieron de fondos adecuados que les permitiera poder cumplir con sus responsabilidades de acuerdo a lo indicado en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas. Tanto las ONGs como algunos funcionarios indicaron que la Comisión no contó con el compromiso de algunos de los Ministerios participantes y que fue ineficaz. El gobierno promulgó una ley que requiere que se presenten informes anuales al Congreso sobre los esfuerzos desplegados contra el delito de trata de personas, incluyendo los esfuerzos por implementar el Plan de Acción. Las autoridades desplegaron algún esfuerzo por lograr que hubiera una mayor toma de conciencia sobre el problema; a menudo lo hicieron en sociedad con organizaciones de la sociedad civil. Varios gobiernos regionales mantuvieron grupos de trabajo contra la trata de personas o desarrollaron planes regionales contra la trata, algunos de los cuales fueron puestos en marcha durante el año. En un esfuerzo por prevenir casos de trabajo forzoso, el Ministerio de Trabajo ofreció una capacitación a su personal que labora en los centros estatales de búsqueda de empleo sobre la manera de identificar ofertas de empleo fraudulentas. Durante el período cubierto por este informe las autoridades peruanas brindaron capacitación a proveedores de servicios turísticos para que pudieran evitar el turismo sexual con menores de edad e investigó posibles casos de turismo sexual. Durante el 2012, las autoridades no reportaron ningún enjuiciamiento o condena de personas que participaron en turismo sexual con menores de edad. El gobierno ofreció a los ciudadanos peruanos a los que se les encargó tareas de mantenimiento de la paz una capacitación en el problema de la trata de personas, antes de que éstos fueran enviados al extranjero en alguna misión internacional de mantenimiento de la paz.